

PETRÓLEO EN PAPUA OCCIDENTAL 2004 (Irian Jaya)

1. EL PROYECTO GASÍFERO TANGGUH: NO SE PUEDE ESPERAR NADA BUENO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

En el actual contexto político y con la militarización de Papua Occidental en aumento, los acuerdos de BP para respetar los derechos humanos y aplicar su nueva política comunitaria, parecen meros saludos a la bandera.

En el año 2003, el pueblo de Papua Occidental continuó con su sufrimiento debido a la represión militar Indonesia. La reanudación de la guerra total en Aceh y luego en Papua Occidental, confirman el resurgimiento de las fuerzas militares como las únicas fuerzas dominantes en el país y el afianzamiento de la práctica de silenciar a las voces pro-independentistas a la fuerza. Durante ese año también aumentó la estrecha relación de las corporaciones y las milicias en Papua Occidental, y a su vez el continuo hostigamiento a los defensores de los derechos humanos y una radical y brutal intervención militar en las aldeas de la región.

Se cree que las corporaciones transnacionales fomentan activamente la violencia en Papua Occidental, perpetuando el derramamiento de sangre para mantener y aumentar el control de la seguridad desde Yakarta. La acusación a los "separatistas" de amenazar la integridad territorial de la república, crea en la opinión pública en Indonesia la idea de la necesidad de un mayor control de las fuerzas militares de Indonesia ante la eventual desintegración nacional.

A quienes protestan se les acusa de querer partir al país y de que se aprovechan de la situación. En enero de este año, el general Ryamizard Ryacudu, amenazó que Indonesia podría perder a Papua y a Aceh gracias a una conspiración extranjera, y que el separatismo busca la vida de 30 millones de personas.

Luego de las elecciones parlamentarias de abril del 2004, se les ha dado a los militares el total involucramiento en el control nacional, provincial y distrital. Para ellos, la motivación para usar los conflictos en Aceh y en Papua Occidental es cada día mayor ya que pueden actuar en estos territorios con total impunidad.

Aunque siete oficiales Kopassus recibieron sentencia de prisión por asesinar al líder pro-independentista, Theys Eluay en 2001, muchos otros crímenes aún no han sido investigados. En enero del 2004, la comisión nacional de derechos humanos, Komnas HAM dijo que hay al menos siete casos de violación de derechos humanos en Papua Occidental que deben ser investigados.

Una segunda motivación para las corporaciones transnacionales para mantener su presencia, es acceder a los recursos naturales de Papua y las oportunidades de obtener ganancias financieras por la madera, la minería, la pesca y el negocio de la seguridad para las empresas.

Por este motivo, no sorprende que la militarización en Papua Occidental haya aumentado (de 4.350 miembros en el 2002 a cerca de 10.000 en el 2003), ni que los efectivos policiales también estén aumentando (se anunció que en el año 2004, otros 3.000 policías irán a la zona del conflicto para salvaguardar las elecciones). Las ONGs temen que la presencia de la policía sea un factor más de violación a los derechos humanos. El Coronel de Policía Timbul Silaen, ha sido destacado como jefe de la región. Este Coronel, estuvo a cargo de las operaciones en Timor Oriental durante el referéndum de agosto de 1999, cuando a las milicias apoyadas por los militares se les permitió aterrorizar a la población. Por esta razón, el coronel ha sido acusado por la Unidad de Crímenes Severos de Timor Oriental.

Un aumento de las tropas en número de 2.000 efectivos se registró en agosto del 2003, las mismas que fueron responsables de la represión en contra de las protestas que reclamaban la independencia de Papua Occidental. Específicamente esta ocurrió luego de la creación de la Central Irian Jaya, que ha sido declarada en Timika el 23 de agosto del 2003. Durante los enfrentamientos, entre los que apoyan a la nueva provincia y sus oponentes, cinco personas fueron asesinadas y otras 50 heridas. Como resultado Yakarta ha pospuesto la implementación de esta decisión, pero no la ha cancelado. La propuesta prevé la partición de la región en tres secciones - Centro, Oeste y Este de Irian Jaya-. Este es un proyecto a largo plazo de los militares para contrarrestar al movimiento pro independentista y ofrece la posibilidad de aumentar la militarización en las tres zonas. Esta política de seguridad promovida desde los años 80 y que el presidente Habibie la revivió en 1999, contradice la débil posición anterior de dictar una categoría de Autonomía Especial, para enero del 2002, y que nunca fue definitiva debido a los obstáculos impuestos desde Yakarta.

A pesar de las preocupaciones expresadas por gobiernos extranjeros, el trato brutal de los indonesios a los Papuanos, que desean ejercer su derecho de auto determinación no ha cambiado nada. El gobierno británico, así como otros gobiernos que han apoyado la Autonomía Especial como la única solución para Aceh y Papua occidental, ha fallado en opinar sobre los errores de Yakarta en su implementación. Ignorando las advertencias de las ONGs, el gobierno británico ha avalado el aumento masivo de la compra de armas por parte del gobierno de Indonesia (de 2 millones a 41 millones en el 2002) y ha apoyado las inversiones de BP a toda costa y en la donación de fondos para proyectos conjuntos en la zona de Bird's Head en Papua Occidental preparando el terreno para que el proyecto Tangguh pueda desarrollarse de forma estable.

Mientras las empresas británicas se benefician de este tipo de comercio e inversión, los habitantes de Papua continúan sufriendo por la opresión militar, los rampantes impactos ambientales por la explotación de los recursos y los efectos en la salud, como el SIDA, que se ha convertido en un severo problema en el territorio.

El proyecto Tangguh encaja en este ambiente político deteriorado, de violaciones de los derechos humanos y deterioro ambiental.

Uno de los principales problemas del proyecto Tangguh es la falta de consentimiento de las comunidades locales cuyas tierras, recursos y formas de vida tradicional serán afectadas por el proyecto. Esto es común en la mayoría de proyectos de extracción de recursos. El resultado es que la población no quiere a las compañías y rechazan este tipo de desarrollo.

De acuerdo con John Rumbiak del grupo de derechos humanos ELSHAM, "la negación del derecho al consentimiento informado previo, es una de las razones por lo que vemos que se impone la dinámica de destrucción y violencia en Papua Occidental. Para terminar con esto la comunidad internacional que quiere invertir en este lugar, debe respetar estos derechos y los derechos colectivos de las poblaciones locales que quieren seguir viviendo con sus formas tradicionales, conservar su cultura, y decir NO a las transnacionales en sus tierras".

Fuente: RESISTENCIA Número 48.- BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 2004